

Un artículo de F. J. BENITO

El Ministerio de Transición Ecológica ha dado un nuevo paso para **reducir el aporte de agua del río Tajo** a la provincia, al publicar en el Boletín Oficial del Estado sendos anuncios dirigidos a adjudicar, vía concesión, ya de manera oficial, toda la cantidad de agua desalada que está previsto producir en la **desaladora de Torreveja** cuando la planta esté a pleno rendimiento. En concreto, la Confederación Hidrográfica del Segura ha abierto el plazo para que cualquier entidad o persona física pueda solicitar la compra, mediante concesión, de agua desalada para uso agrícola.

A esto se une la solicitud de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, tan estatal como la Confederación, que ha reclamado una concesión para recibir 40 hm<sup>3</sup>; de agua desalada para abastecer a los municipios de Alicante y Murcia.

Una petición que hará que, a medio plazo, de los 195 hm<sup>3</sup>; de agua que requiere todos los años la Mancomunidad para garantizar el abastecimiento, 110 hm<sup>3</sup>; serán ya de **caudal desalado**, lo que reducirá a la mitad la dependencia del trasvase del Tajo (80 hm<sup>3</sup>; actuales al año). El resto, 45 hm<sup>3</sup>;, proceden del propio río. Obviamente, el aumento de la dependencia del agua desalada repercutirá en el **precio** a pagar, tanto en el recibo doméstico como en el coste agrícola.

Y todo en un contexto en el que el Gobierno ha comunicado a los regantes que no habrá más renovaciones del decreto de sequía vigente desde hace dos años.

La licitación abre un nuevo cisma del ministerio con los regantes, ya que se ha hecho sin contar con el Sindicato Central del Tajo-Segura ni con Riegos de Levante, lo que se interpreta como un nuevo movimiento de Transición Ecológica para dividir a los agricultores, ya que, cualquiera, hasta un particular, puede pedir concesión del agua desalada. Un movimiento más, por lo tanto, para imponer el agua desalada e ir reduciendo los aportes del Tajo al Segura.

Hasta ahora, el agricultor que quería compraba el agua desalada. Ahora se pretende **imponerla** como concesión tal como se ha publicado en el BOE donde, según denuncia Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante (20.000 comuneros) no figura ni el precio ni cómo nos van a enviar el agua.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, considera un **dislate** «este movimiento el ministerio que no se explica por otro motivo que por su negativa a seguir renovando el decreto de sequía. Llevamos dos años negociando la fórmula para repartir el agua desalada y

ahora nos encontramos con un anuncio para que el caudal funcione como una concesión y, encima, nos dan un mes, tiempo que, técnicamente, es imposible poder cumplir para las comunidades de regantes. Y encima no nos dicen ni el precio»

Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante, también considera un tanto surrealista la manera de actuar del ministerio en esta cuestión. «Nos quieren adjudicar el agua desalada y ni siquiera estamos conectados con la desaladora de Torrevieja ni nos dan un precio de referencia del agua desalada que mucho me temo terminará costando un euro», asevera Javier Berenguer.

«No es más que otro **movimiento para dividir**, como han hecho con los regantes del Júcar-Vinalopó», señaló Ángel Urbina, portavoz de la mesa técnica del agua de la Diputación.

El Ministerio para la Transición Ecológica ultima, por otro lado, la licitación del proyecto para interconectar las desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas entre ellas y con el canal del postravase Tajo-Segura en Ojós en 2021 y garantizar, según el Gobierno, el riego agrícola los 365 días del año. Regadío que será más caro al mezclar agua desalada a 0,60 euros/m<sup>3</sup> con la del trasvase (0,12 euros/m<sup>3</sup>). Un proyecto, no obstante, que carece de consignación presupuestaria tras el fiasco que ha resultado esta minilegislativa.

La falta de voluntad política en los gobiernos que pasan por Madrid provoca que Alicante tenga en esos momentos infraestructuras hidráulicas valoradas en 1.500 millones de euros que no cumplen su función, y tienen contra la pared al potente y estratégico sector agrícola de la provincia, que mueve dos mil millones de euros al año.

Significativos son los casos de la desaladora de Torrevieja, que costó 350 millones de euros y carece de conexión con más de 30.000 agricultores y el trasvase Tajo-Segura, una obra que ya a final de los años 70 del siglo XX costó 600 millones de euros, prácticamente sin caudal para trasvasar a Alicante y a Murcia. Un trasvase que hoy tiene un valor de 7.000 millones de euros al garantizar una producción agrícola de 5.500 millones de euros al año en Alicante y Murcia.